

proveído de **veintidós de octubre de dos mil veinte**, la **admitió a trámite**, requirió a las autoridades responsables para que rindieran su informe justificado, otorgó al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde, quien no formuló pedimento; y, fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional.

CUARTO. AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el cinco de febrero de dos mil veintiuno, la parte quejosa amplió su demanda de amparo, en contra de los actos de las autoridades que a continuación se indican:

“3. AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES:

- a) *CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (...)*
- b) *Secretaría de Comunicaciones y Transportes (...)*

4.- ACTO RECLAMADO:

a) *De la autoridad responsable **CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos** se reclama la omisión de prestar y proveer servicios de telecomunicaciones, sin fines de lucro, para garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, incluido el de banda ancha e internet, a la comunidad de *****
***** ******

b) *De la autoridad denominada **Secretaría de Comunicaciones y Transportes**, se reclama la omisión de expedir el Plan de Cobertura Social 2020 y 2021, así como de contemplar a la comunidad de ***** ***** ***** , en el catálogo de localidades prioritarias, a fin de coordinarse para lograr el acceso efectivo a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, en el ámbito de sus facultades legales y constitucionales*

competencia declinada, habiendo devuelto el expediente al **Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Agua Prieta**, quien ordenó remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con sede en Hermosillo, para que resolviera el conflicto competencial suscitado.

OCTAVO. CONFLICTO COMPETENCIAL. Tocó conocer del conflicto competencial, al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, registrándolo con el número **27/2022**, resuelto el **diecinueve de octubre de dos mil veintidós**, en el que determinó:

*“**ÚNICO.** Se declara **LEGALMENTE COMPETENTE al Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, para conocer y resolver el juicio de amparo indirecto promovido por ***** y otros.**”*

NOVENO. RECEPCIÓN DEL EXPEDIENTE. Por acuerdo de **cuatro de noviembre de dos mil veintidós**, este Juzgado Federal recibió el testimonio de la resolución referida en el resultando que antecede, así como los autos originales del juicio de amparo, reservándose proveer lo conducente, hasta en tanto el **Juez Noveno de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Agua Prieta**, remitiera los cuadernos incidentales.

DÉCIMO. RADICACIÓN Y PREVENCIÓN. Este Juzgado Federal en auto de **once de noviembre de dos mil veintidós**, se avocó al conocimiento del presente asunto y previno a la parte quejosa en particular a *****

Registro Civil del Estado de Sonora, para que remitiera copia certificada del acta de inscripción de nacimiento del niño de iniciales ***** al existir discrepancia en el nombre de la madre ***** y a ***** lo requirió para que exhibiera la constancia que acreditara la representación de la niña de iniciales ***** , por no coincidir el nombre registrado como padre de la citada infante, apercibido que de acreditar la representación legal, le nombraría un representante especial.

En auto de **veintitrés de enero de dos mil veintitrés**, se tuvo a **Ignacio Miñón Ramírez**, como representante especial de la niña de iniciales *****

Por cuanto hace al infante de iniciales ***** este órgano jurisdiccional realizó las acciones pertinentes para corroborar que ***** es su progenitora y su representante en el presente juicio de amparo, lo que quedó acreditado en autos.

DÉCIMO TERCERO. ADSCRIPCIÓN DE LA ACTUAL TITULAR. Se informó a las partes sobre la adscripción de la suscrita, como nueva titular de este Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República Mexicana, mediante acuerdo de once de agosto de dos mil veintitrés, sin que hubieran hecho manifestación de impedimento; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito es

avance tecnológico.

Lo expuesto evidencia que, las responsables **Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos** sustentan su negativa en la consideración de que contrario a lo que señala la parte quejosa, no han sido omisas en cumplir con la obligación (dentro de su esfera de competencias) de garantizar el derecho al acceso a las tecnologías de la información y comunicación y a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluyendo el de banda ancha e internet, y no en el hecho de que no tengan la obligación que se les atribuye.

Por tanto, considerando que la certeza o falsedad de los actos omisivos debe precisarse atendiendo a la competencia de las autoridades, a fin de verificar si en realidad se encuentran constreñidas a actuar en el sentido en que se les exige y que tal obligación no está en duda, debido a la aceptación implícita de las responsables, procede tener por **ciertos** los actos reclamados.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. XXIV/98, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 53, Tomo VII, junio de 1998, Materias Común y Administrativa, Novena Época, con registro digital 196080, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece:

“ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA

hagan valer las partes o que amerite su estudio de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con la jurisprudencia número 940, visible en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1998, que dice:

“IMPROCEDENCIA. Sea que las partes las aleguen o no, deben examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.”

En el caso, esta Juzgadora Federal advierte de oficio, que respecto del acto reclamado al Instituto Federal de Telecomunicaciones, consistente en la omisión de dar contestación a su escrito de petición presentado el tres de agosto de dos mil veinte, del que se advierte que de todos los aquí quejosos, solo fue signado por ***** ***** *****

***** y otros, por sí, en el que hicieron del conocimiento de la responsable la situación en que se encontraban dadas las necesidades de comunicación que enfrentaban y solicitaron la infraestructura de comunicación que garantizara conectividad adecuada que permitiera el goce de otros derechos, como el de educación, a la salud, de seguridad, entre otros, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el **artículo 61, fracción XXI**, de la Ley de Ampro, al haber cesado los efectos del acto reclamado.

Por su parte, el **artículo 61, fracción XXI**, de la ley de la materia, establece:

***“Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:
(...)***

XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.”

la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas.”

Asimismo, es aplicable al caso, la jurisprudencia 1a./J. 38/2016, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 690, Libro 33, agosto de 2016, Tomo II, Materia Común, Décima Época, con

(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013)

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013)

El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.

(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013)

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

(...)

(ADICIONADO, D.O.F. 11 DE JUNIO DE 2013)

B. En materia de radiodifusión y telecomunicaciones:

I. El Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de la información y el conocimiento, mediante una política de inclusión digital universal con metas anuales y sexenales.

II. Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias.

III. La radiodifusión es un servicio público de interés general, por lo que el Estado garantizará que sea prestado en condiciones de competencia y calidad y brinde los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad nacional, contribuyendo a los fines establecidos en el artículo 3o. de esta Constitución.

(...).

En el precepto legal trasunto, se reconoce el derecho de **toda persona** al libre acceso a información plural y

La Secretaría definirá los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión que se incluirán en el programa de cobertura social, con prioridad a los servicios de acceso a Internet y servicios de voz, y diseñará y promoverá los incentivos para la participación de los concesionarios en el mismo.

Artículo 212. La Secretaría en coordinación con el Instituto y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, definirá y publicará los indicadores que permitan medir la evolución de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión en todo el territorio nacional, siguiendo en la medida de lo posible y sin que se entienda limitativo, las metodologías reconocidas internacionalmente que permiten la medición del progreso y la comparación internacional. Estos indicadores tendrán por objetivo cuantificar el avance de los programas de cobertura social y de conectividad en sitios públicos.

Los concesionarios involucrados en los programas de cobertura social, estarán obligados a reportar a la Secretaría los datos que permitan cuantificar el avance de los programas de cobertura social y, en su caso, el cumplimiento de las obligaciones adquiridas. La Secretaría dará seguimiento al cumplimiento de los concesionarios o autorizados a los compromisos adquiridos en los programas respectivos y el Instituto sancionará el incumplimiento de los concesionarios o autorizados a las obligaciones de cobertura social o cobertura universal que les hubiere establecido.

Artículo 213. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en coordinación con la Secretaría, establecerá los mecanismos administrativos y técnicos necesarios y otorgará el apoyo financiero y técnico que requieran las instituciones públicas de educación superior y de investigación para la interconexión entre sus redes, con la capacidad suficiente, formando una red nacional de educación e investigación, así como la interconexión entre dicha red nacional y las redes internacionales especializadas en el ámbito académico.

Artículo 214. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán apoyar el desarrollo de los programas de cobertura social y de conectividad en sitios públicos, así como la estrategia digital que emita el Ejecutivo Federal.

www.dof.gob.mx/2019/SCT/prpgrama_de_cobertura_social_2019.pdf.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/500252/2019-10-02_PCS_version_web_miercoles_9_octubre.pdf.

Atento al mandato Constitucional, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes emitió los Programas de Cobertura Social anuales, así como los de Conectividad en Sitios Públicos, con el objeto de establecer las bases para promover el incremento en la cobertura de las redes y la penetración de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión incluyendo banda ancha e Internet, bajo condiciones de disponibilidad, asequibilidad y accesibilidad, en las Zonas de Atención Prioritaria de Cobertura Social.

En el “**Programa de Cobertura Social 2019**” - que es al que hace referencia la parte quejosa en su escrito de ampliación de demanda - se señaló lo siguiente:

“(…)

1. Cobertura Social: Una nueva dimensión de la modernidad y la justicia social.

En nuestro país, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el derecho de acceso para todos los mexicanos a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, incluido el de banda ancha e Internet, debe ser garantizado por el Estado. Asimismo, establece que el Estado elaborará una Política de Inclusión Digital Universal con metas anuales y

Telecomunicaciones (IFT) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), este último ejecuta, ofrece la información estadística que pone de relieve la dimensión de estos retos. Históricamente se han observado avances, pero las brechas continúan siendo importantes: el número de usuarios de Internet en México en 2018 equivale a sólo 65.8 por ciento de la población mayor de seis años; los usuarios de telefonía móvil comprenden al 73.5 por ciento de la población; mientras que 1.4 millones de hogares todavía no cuentan con señal de televisión digital terrestre. Es claro que aún existe una importante brecha que dificulta el acceso equitativo de toda la sociedad a los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión incluyendo la banda ancha e Internet.

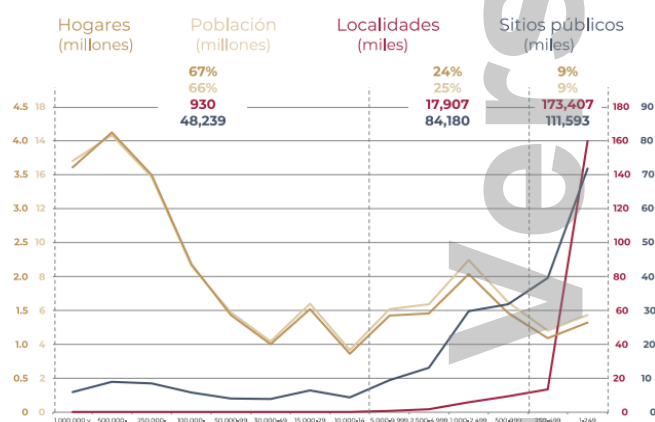
Para el Gobierno de México, el acceso a estos servicios forma parte integral de la política para lograr la equidad y la justicia social. El Proyecto de Nación 2018-2024, por ejemplo, presenta proyectos y propuestas que exponen soluciones concretas para combatir la pobreza, crear fuentes de trabajo, impulsar la productividad, particularmente en el campo, integrar a los jóvenes a programas educativos y laborales, y atender a los adultos mayores. Con esta visión, y en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, el objetivo de dicho Proyecto de Nación es ampliar la cobertura de banda ancha en zonas marginadas e impulsar el acceso a precios asequibles para permitir a sus habitantes aprovechar los beneficios derivados del uso productivo y cotidiano de estas infraestructuras tecnológicas.

La política del Gobierno de México debe estar orientada a desarrollar de manera eficiente las telecomunicaciones y la radiodifusión para el beneficio de la

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Turismo, con el objeto de integrar las zonas deprimidas a través de las telecomunicaciones y la radiodifusión, incluida la banda ancha e Internet principalmente a las actividades de salud, educativas, de cultura y productivas.

3. Identificación de las zonas sin cobertura.

México enfrenta retos importantes para lograr una cobertura de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, incluidos los de banda ancha e Internet, accesibles a toda la población. Los tres principales retos de cobertura son: la dispersión poblacional, la compleja orografía del país y los bajos niveles de ingreso y altos grados de marginación de algunos sectores de la población.

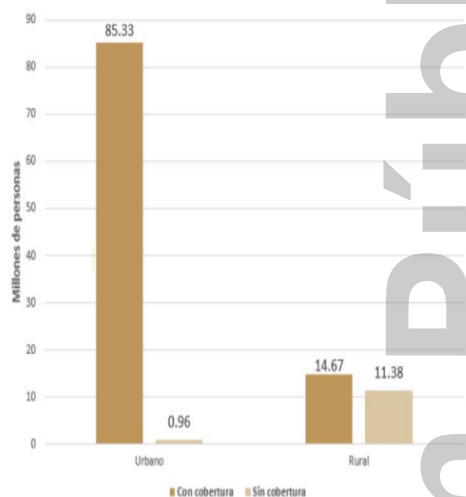


Gráfica 1. Población y número de localidades por tamaño de la localidad
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo 2010 del INEGI

En la Gráfica 1, se puede apreciar la distribución de la población y de localidades en el país. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda levantado por el INEGI en el año 2010,

En la Gráfica 1, se puede apreciar la distribución de la población y de localidades en el país. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda levantado por el INEGI en el año 2010, en México habitaban 112.3 millones de personas

(0.96 millones de personas) carece de cobertura de datos móviles, mientras que aproximadamente el 44 por ciento de las personas en localidades rurales no cuentan con ella (11.38 millones de personas).

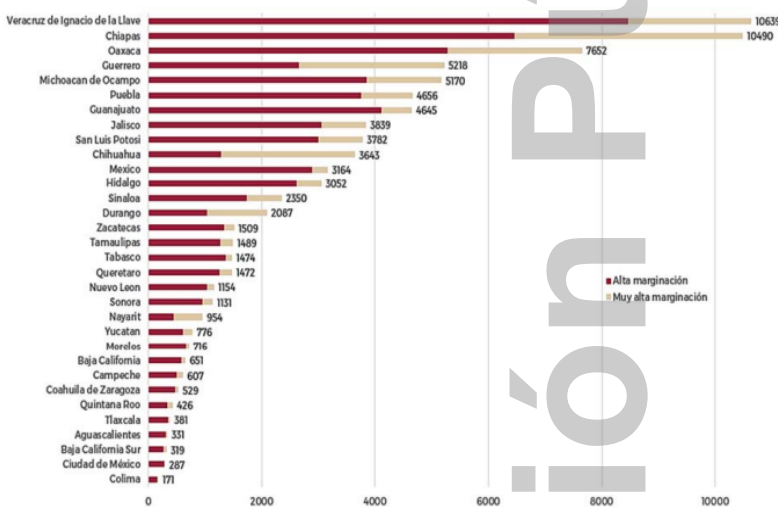


Gráfica 2. Cobertura urbana vs rural: millones de personas con o sin cobertura de datos móviles en entorno rural y urbano
Fuente: Elaboración propia con datos de cobertura proporcionados por el IFT

En este sentido, para lograr una mayor cobertura de servicios de Internet los esfuerzos deben centrarse en localidades rurales, donde la brecha de cobertura es mayor.

La SCT ha identificado empresas micro, pequeñas y medianas que ofrecen sus servicios en localidades y regiones pequeñas utilizando principalmente frecuencias de uso libre para proveer acceso a Internet en todo el país. Algunos Proveedores de Acceso a Internet Inalámbrico (WISP, por sus siglas en inglés) que no contaban con una concesión han manifestado su disposición a regularizar los servicios que prestan y contribuir a la cobertura universal. Tan solo en los últimos dos años se han presentado 64 solicitudes para el otorgamiento de concesiones únicas de uso comercial que

telecomunicaciones al Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la clasificación de grados de marginación de la CONAPO, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes identifica aproximadamente 5 mil 400 localidades de alta o muy alta marginación, mayores o iguales a 500 habitantes, cuya población total es de 5 millones de personas, que se encuentran sin cobertura



Gráfica 3. Localidades mayores a 500 habitantes sin cobertura de alto y muy alto grado de marginación

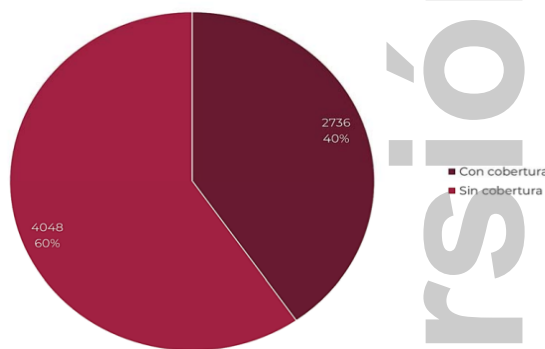
Fuente: elaboración propia con datos del IFT, INEGI y CONAPO

Criterio No. 2: Localidades de más de 250 habitantes con presencia de población indígena del 40 por ciento o más.

A partir del análisis realizado con datos de INEGI y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), se han identificado aproximadamente 5 mil 200 localidades con presencia de población indígena de más del 40 por ciento que se encuentran fuera de zonas de cobertura de redes de telecomunicaciones fijas y móviles de banda ancha, con al

Criterio No. 4: Localidades de más de 500 habitantes identificadas como Zonas de Atención Prioritaria, de acuerdo con el “DECRETO por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año 2019”.

La SCT ha identificado aproximadamente 4 mil localidades en municipios que se encuentran dentro de Zonas de Atención Prioritaria fuera de zonas de cobertura de redes de telecomunicaciones fijas y móviles de banda ancha y con poblaciones mayores a 500 habitantes, cuya población total es de 3 millones 700 mil personas.



Gráfica 6: Localidades en Zonas de Atención Prioritaria del Decreto
Fuente: elaboración propia con datos del IFT e INEGI

Criterio No. 5: Ser cabecera municipal.

La SCT ha identificado 531 cabeceras municipales fuera de zonas de cobertura de redes de telecomunicaciones fijas y móviles de banda ancha cuya población total es de 580 mil habitantes.

servicios de telecomunicaciones o el despliegue de infraestructura.

(...)

5. Desarrollo del Programa de Conectividad en Sitios Públicos.

Para la elaboración de este Programa la SCT, en coordinación con las instituciones participantes, que en 2019 son Bienestar, Educación y Salud, genera, revisa y actualiza una “Base de datos de Detección de Necesidades de Conectividad” que contiene información detallada de cada uno de los sitios públicos que propone cada institución para ser candidatos a la conectividad. En la base se incluyen datos generales como la dirección postal de cada sitio público. La base de datos de Bienestar se encuentra en el Anexo 1, la base de datos de Educación en el Anexo 2, la base de datos de Salud en el Anexo 3 y el Anexo 4 son los Sitios Públicos por Conectar que concentra los sitios públicos prioritarios de las tres bases de datos anteriores.

(...)

5.3 Sitios Públicos por Conectar Prioritarios.

En total, en la base de datos del Programa de Conectividad en Sitios Públicos se identificaron 112,706 sitios públicos por conectar, de los cuales 19,048 son considerados como prioritarios.

La priorización de sitios públicos por conectar se realizó considerando los sitios públicos que Bienestar, Educación y Salud que se encuentran en las localidades definidas como Zonas de Atención Prioritaria en el

impulse el acceso efectivo de la población a la comunicación de banda ancha y a los servicios de telecomunicaciones, de conformidad con los principios contenidos en el artículo 6o., Apartado B, fracción II del presente Decreto y las características siguientes:

I. Iniciará la instalación antes de que concluya el año 2014, y estará en operación antes de que concluya el año 2018;

II. Contemplará el aprovechamiento de al menos 90 MHz del espectro liberado por la transición a la Televisión Digital Terrestre (banda 700 MHz), de los recursos de la red troncal de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad y de cualquier otro activo del Estado que pueda utilizarse en la instalación y la operación de la red compartida;

III. Podrá contemplar inversión pública o privada, identificando las necesidades presupuestales y, en su caso, las previsiones que deba aprobar la Cámara de Diputados;

IV. Asegurará que ningún prestador de servicios de telecomunicaciones tenga influencia en la operación de la red;

V. Asegurará el acceso a los activos requeridos para la instalación y operación de la red, así como el cumplimiento de su objeto y obligaciones de cobertura, calidad y prestación no discriminatoria de servicios;

VI. Operará bajo principios de compartición de toda su infraestructura y la venta desagregada de todos sus servicios y capacidades, y prestará exclusivamente servicios a las empresas comercializadoras y operadoras de redes de telecomunicaciones, bajo condiciones de no discriminación y a precios competitivos. Los operadores que hagan uso de dicha compartición y venta desagregada se obligarán a ofrecer a los demás operadores y comercializadores las mismas condiciones que reciban de la red compartida, y

VII. Promoverá que la política tarifaria de la red compartida fomente la competencia y que asegure la reinversión de utilidades para la actualización, el crecimiento y la cobertura universal.

Por ello, la iniciativa prevé la ejecución de una política de inclusión digital universal, en la que se incluirán los objetivos y metas en materia infraestructura y conectividad, tecnologías de la información y comunicación, y habilidades digitales, así como los programas de gobierno digital, gobierno y datos abiertos, fomento a la inversión pública y privada en aplicaciones de telesalud, telemedicina y Expediente Clínico Electrónico, y desarrollo de aplicaciones, sistemas y contenidos digitales, entre otros aspectos.

Dicha política tendrá, entre otras metas, que por lo menos 70 por ciento de todos los hogares y 85 por ciento de todas las micros, pequeñas y medianas empresas a nivel nacional, cuenten, a precios competitivos, con accesos con una velocidad real para descarga de información de conformidad con el promedio registrado en los países miembros de la OCDE.

[...]

Finalmente, en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática, se establece que el Ejecutivo Federal incluirá en el Plan Nacional de Desarrollo:

Un programa de banda ancha en sitios públicos que identifique el número de sitios a conectar cada año. La tendencia internacional considera el acceso a la banda ancha en sitios públicos de investigación, educación, salud, centros comunitarios y otros inmuebles de gobierno como una responsabilidad del Estado. A través de ellos se proveen servicios de alto impacto social produciendo una mejoría en las oportunidades de la población en general y en particular de los grupos en zonas rurales o marginadas, reduciendo así la brecha digital e incrementando los niveles de bienestar.

Un programa de trabajo para dar cabal cumplimiento a la política para la transición a la Televisión Digital Terrestre.

Un Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico para garantizar el uso óptimo de las bandas 700 MHz y 2.5 GHz bajo principios de acceso universal, no discriminatorio, compartido y continuo.

amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos.”

Cabe agregar, que si bien en el Programa de Cobertura Social 2019, se estableció que con el fin de contribuir al alcance de la cobertura universal y en apego a lo dispuesto en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el Programa de Cobertura Social podrá ser aprovechado por el Instituto para establecer a los concesionarios las obligaciones de cobertura geográfica, poblacional o social y de conectividad en sitios públicos y que serían estos los responsables de ampliar el despliegue de las redes en condiciones de competencia, atendiendo además sus compromisos de cobertura y penetración, también se señaló que en las localidades sin cobertura, la nueva empresa productiva subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acercará los servicios a las zonas prioritarias.

Lo anterior, aparece corroborado con lo siguiente:

“(…)

*Como puede apreciarse en la Gráfica 1, la mayor parte de la población (66 por ciento) se concentra en sólo 930 localidades de 10 mil habitantes o más, mientras que el 9 por ciento de la población, aproximadamente 10.1 millones de habitantes, viven en más de 170 mil localidades. **A nivel internacional, se estima que las localidades menores a 5,000 habitantes no son rentables para los operadores***



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:
86195129_4138000029686765057.p7m
Autoridad Certificadora:
Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal
Firmante(s): 2

FIRMANTE				
Nombre:	ROSALBA BALDERAS ALVAREZ	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No. serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.a5.16	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha: (UTC/ CDMX)	14/06/24 19:18:56 - 14/06/24 13:18:56	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	1a a9 e9 f8 f0 31 1b 4b 0d 90 62 b4 5c 38 02 a1 8f fb 05 72 ca 4f 58 b2 52 a1 e2 c6 cb a9 78 26 71 80 08 76 95 d5 ff 74 5a 77 07 d3 37 87 61 fb 11 7a 8d b8 77 06 40 59 69 24 34 b8 0d 16 25 ef 4d 99 52 3e 89 01 b6 ff 3c 04 b8 d2 90 a4 d5 20 67 15 07 2d 12 95 dc 5c 0f 62 aa f8 a8 b3 14 a9 25 e0 8e 41 b4 5d e9 6c 41 9c cc ed 04 c2 45 3a 2b 48 b8 af 6b ec cc 90 61 2e fc ad 6b 97 70 47 b5 72 77 12 ca e2 65 68 07 e5 2f da 8c 0e 65 8d 10 e6 c5 52 d7 91 a4 f3 5e 57 d7 59 61 ce 13 8c 06 26 3b ac 8d 47 68 fa 15 b4 58 77 c3 e1 de 2d 9d 7a 8f 9d 31 a8 3d 6e 87 48 38 38 ee 01 04 2a ea ba e6 8a 1f df 5f e0 8b 06 2c 1d f6 de 2e f2 72 b1 6e 38 56 b4 74 36 af 96 9d 21 0c 02 ea 34 bc 4f 0e 6f 59 4e 10 a5 7d dc a9 ec 3d 10 4f d3 6a d3 2b f7 34 43 57 5f ac 41 c9 c0 2f bc 1c dc			
OCSP				
Fecha: (UTC / CDMX)	14/06/24 19:18:55 - 14/06/24 13:18:55			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.32.20.63.6a.66.6f.63.73.70			
TSP				
Fecha : (UTC / CDMX)	14/06/24 19:19:12 - 14/06/24 13:19:12			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	150820427			
Datos estampillados:	BXGt4ksi4nKrlabjCfmVsrqzags=			



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	LAURA GUTIERREZ DE VELASCO ROMO	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No. serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.7a.19	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha: (UTC/ CDMX)	14/06/24 19:22:50 - 14/06/24 13:22:50	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	0c f7 68 1d 59 b0 94 0d 3f 75 52 f1 5b c4 90 ba 87 ac db 56 9b 37 d4 5a cb f4 1c ba 67 90 93 3d 90 9b db 02 2c 55 ae 2c a6 20 86 f5 08 a5 69 ad 93 cc a9 bf 0a ec e9 4b f2 dc 23 40 13 13 7e 7c 87 90 c2 19 e3 d1 51 2a 12 33 ef f5 a8 4d 02 85 37 ee 5d 68 3b b1 17 1e 59 b9 77 c0 ca 1c b1 50 94 1d f3 82 cf f3 ff 0d e1 ee 9d 9d 30 d5 e6 36 81 38 01 f8 82 1c a5 cf f3 84 83 9f a4 b6 f2 d4 89 25 f2 40 6b 28 a3 a5 ae 28 78 47 bf 78 68 c6 b0 02 a7 c5 a2 24 4d 2e 21 de 85 a0 4d d7 78 f0 40 b4 3e 61 6e 44 30 9e 66 fe a0 00 df a3 ba 57 1e 1b 9b 39 f2 f0 79 ff 62 a6 0f 31 c2 3b 77 a9 0a a4 cc 3f ca f0 8c d6 07 d6 94 3f c6 36 f7 1b 19 1b aa 56 ba 97 b5 3b 35 75 92 da c3 57 0a 99 34 27 e3 5a 82 cd 14 b2 c8 77 b4 fe ef bc 07 9d 1d 8a 77 0e fe 75 c2 43 2a 25 c7 c8 6e 03 63 03			
OCSP				
Fecha: (UTC / CDMX)	14/06/24 19:22:49 - 14/06/24 13:22:49			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.32.20.63.6a.66.6f.63.73.70			
TSP				
Fecha : (UTC / CDMX)	14/06/24 19:22:50 - 14/06/24 13:22:50			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	150824250			
Datos estampillados:	b8KrClO7fk3WgCwWw3RC6J4N4EEg=			

El licenciado(a) Rosalba Balderas Alvarez, hago constar y certifico que en términos de lo previsto en los artículos 8, 13, 14, 18 y demás conducentes en lo relativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en el ordenamiento mencionado. Conste.

PJF - Versión Pública